

¿Vive América Latina un segundo ciclo de política de izquierda?

Maxwell A. Cameron y Agustín Goenaga*

RESUMEN: Las recientes victorias electorales de líderes y partidos de izquierda marcan otro giro en las oscilaciones de la política latinoamericana, pero también señalan cambios duraderos. El éxito electoral de la izquierda es un signo tanto de la perdurabilidad de la democracia electoral como de la persistencia de las presiones sociales en sociedades altamente desiguales. En este artículo, discutimos cómo los destinos electorales y las estrategias de gobierno de los movimientos y partidos de izquierda reflejan las condiciones en las que surgieron. Analizamos los legados políticos y organizativos de la represión de la Guerra Fría, así como las formas en que eventos globales como el 11 de septiembre, el boom de las materias primas de la década de 2000 y su agotamiento, la pandemia de covid-19 y la nueva ola global de movimientos progresistas, han dado forma al devenir de las políticas de izquierda. Concluimos con reflexiones sobre las posibilidades de construcción de la social-democracia como alternativa a la política populista radical y a la política oligárquica de derecha.

Palabras clave: izquierda latinoamericana, democracia, desigualdad, populismo, oligarquía, post-guerra fría.

Is Latin America Experiencing a Second Cycle of Leftist Politics?

ABSTRACT: Recent electoral victories by left-leaning leaders and parties mark another turn in the oscillations of Latin American politics, but they also signal enduring changes. The electoral success of the left is a sign of both the durability of electoral democracy and the persistence of social pressures in highly unequal societies. In this article, we discuss how the electoral fates and governing strategies of leftist movements and parties reflect the conditions in which they emerged. We analyze the political and organizational legacies of Cold War repression as well as the ways in which global events such as 9/11, the commodity boom of the 2000s and its exhaustion, the covid-19 pandemic, and the new global wave of progressive movements, have shaped the ebb-and-flow of left-wing politics. We conclude with reflections on the possibilities for the construction of social democracy as an alternative to radical populist and right-wing oligarchical politics.

Keywords: Latin American left, democracy, inequality, populism, oligarchy, post-Cold War.

***Maxwell A. Cameron** es profesor principal en el Departamento de Ciencia Política y la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales, University of British Columbia. 1866 Main Mall, Vancouver, Canada V6T 1Z1. Tel: 604 786 0992. Correo-e: max.cameron@ubc.ca. ORCID: 0000-0003-4873-9851. **Agustín Goenaga** es profesor asociado, Departamento de Ciencia Política, Universidad de Lund. Allhelgonakyrkogata 14 Lund, Suecia, 22100. Tel: +46 462 229 464. Correo-e: agustin.goenaga@svet.lu.se. ORCID: 0000-0001-8179-310X.

Artículo recibido el 8 de septiembre de 2022 y aceptado para su publicación el 15 de diciembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

Las recientes victorias electorales de líderes y partidos de izquierda marcan otro giro (en algunos casos, un nuevo giro) en las oscilaciones de la política latinoamericana. Los peronistas regresaron al poder en Argentina bajo el liderazgo de Alberto Fernández en 2019 en una lista que incluía a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (sin relación) como su vicepresidenta. El dramático regreso del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia bajo el liderazgo del presidente Luis Arce en 2020 siguió al golpe de 2019 que depuso al presidente Evo Morales (2006-2019). En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, excarcelado en 2019, ganó por poco la presidencia en octubre de 2022 frente al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, con lo que obtuvo un tercer mandato.

Incluso más llamativo ha sido el éxito electoral de la izquierda en países tradicionalmente considerados como bastiones de la ortodoxia neoliberal. En México se produjo un giro a la izquierda con la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018. Pedro Castillo, candidato del partido de izquierda Perú Libre, ganó por poco la segunda vuelta en 2021. En Chile, la notable victoria del exlíder estudiantil Gabriel Boric en 2021 siguió a la elección de una asamblea constituyente en un intento finalmente fallido de reemplazar la constitución autoritaria de esa nación. La elección de Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya (2006-2009), pasó la página de un oscuro episodio de la historia de Honduras. Quizá lo más notable ha sido la histórica elección de Gustavo Petro en Colombia en 2022, la primera vez que se elige a un presidente de izquierda en ese país.

Si incluimos a las no-democracias, hay tres miembros del Foro de São Paulo en el poder: Cuba con Miguel Díaz-Canel, en el cargo desde 2019, Nicolás Maduro en Venezuela, quien sucedió a Hugo Chávez en 2013, y Daniel Ortega en Nicaragua, en el cargo desde 2007. Entre los demás países latinoamericanos, hay varios en los que la izquierda ha gobernado antes y sigue siendo una fuerza política importante, entre los que destacan Ecuador y Uruguay. De hecho, si la izquierda no se hubiera dividido en Ecuador en las elecciones de 2021, ciertamente mantendría el poder hoy. Asimismo, el Frente Amplio en Uruguay sigue siendo el partido de izquierda más exitoso de la región.

¿Qué explica los repetidos éxitos electorales de la izquierda en América Latina? Una respuesta es que el surgimiento y establecimiento de la izquierda es simplemente una consecuencia de la alternancia electoral normal y el sentimiento antioficialista entre los votantes tras gobiernos de derechas. Como lo expresó Eric Hershberg (2021): “la lógica impulsora de la política latinoamericana desde el avance de la democracia en la década de 1980 ha sido castigar a los líderes que han presidido una disminución del bienestar y recompensar a los presidentes que se percibe que han entregado recompensas materiales o simbólicas a amplios segmentos de la población”.

Otro punto de vista es que las victorias electorales de la izquierda tienden a seguir ciclos de protesta social y movilización. Así fue durante el primer ciclo (Beasley-Murray *et al.*, 2010). Del mismo modo, el ciclo más reciente de victorias electorales de la izquierda ha ido, al menos en algunos casos, de la mano de tensiones sociales y protestas callejeras. En particular, las grandes protestas en Ecuador (2019), Chile (2019-2020), Perú (2020), Bolivia (2019-2020) y Colombia (2019 y 2021) reflejaron la frustración y la ira del sector popular en respuesta al estancamiento económico después de un rápido crecimiento. La expansión de las clases medias a principios de la década de 2010, cuando la izquierda estaba en el poder en muchos países de la región, fue seguida por una contracción, exacerbada por el covid-19, que envió a millones de personas a la pobreza (Banco Mundial, 2021). En resumen, el segundo ciclo de victorias de la izquierda refleja tanto la alternancia normal en el cargo como las protestas sociales a raíz de los problemas económicos.

Si bien ambos argumentos brindan explicaciones parciales, creemos que hay más que factores coyunturales en juego. Un estudio reciente de las políticas de inclusión en América Latina (Kapiszewski *et al.*, 2021) sugiere que “el principal impulso detrás del giro inclusivo de la región radica en la interacción sostenida entre dos fenómenos más amplios: la desigualdad y la resiliencia democrática”. Argumentamos que el surgimiento y el establecimiento de la izquierda política como una fuerza electoral importante en la región, una que no va a desaparecer, es parte integral de este giro inclusivo. Esa es, quizá, la conclusión más importante de las tendencias actuales. Los giros a la izquierda que comenzaron en la década de 2000 fueron una novedad —y por eso llamaron la atención—, pero formaron parte de procesos históricos más amplios, tanto globales como específicos de América Latina.

La perdurabilidad de la democracia en la región implica que, en su mayoría, los actores latinoamericanos de izquierda ya no piensan en la toma del poder como un hecho histórico que ocurre de una vez y para siempre. En lugar de capturar la ciudadela del poder y aferrarse a ella, una actitud que reflejaba la exclusión de la izquierda del acceso al poder por medios democráticos en el pasado, las izquierdas de hoy parecen reconciliarse, de diferentes maneras y con diferentes ritmos, con la alternancia en el cargo, el principio medular de la democracia electoral. Estas tendencias positivas no deben pasarse por alto a medida que nos enfocamos en los desafíos reales para la democracia en la región. No negamos la persistencia de una izquierda militarista en algunos lugares. Los regímenes autoritarios de hoy que se inclinan hacia la izquierda tienen raíces militaristas en la política de la Guerra Fría y todavía ven la política a través de aquel imaginario. El régimen revolucionario de Cuba es el ejemplo más obvio, pero Daniel Ortega también llegó por primera vez al poder por medios revolucionarios durante la Revolución Sandinista de 1979, mientras que Chávez provino de círculos conspiradores dentro del ejército venezolano que motivaron su intento de golpe de 1992 e informaron sus prácticas en el cargo. Sin

embargo, estos actores son más bien la excepción que la norma de la política de izquierda en la región hoy.

El miedo a la izquierda radical con frecuencia ha dado lugar a violaciones por parte de la derecha de los procesos democráticos mediante feroces respuestas contra las victorias electorales de la izquierda. Esto se ejemplifica con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Los legisladores lo depusieron por simplemente proponer un plebiscito sobre reformas constitucionales con una inclinación potencialmente chavista. La destitución de Dilma Rousseff en Brasil fue una interrupción del orden constitucional por motivos políticos por parte de miembros del Congreso que temían investigaciones sobre su propia corrupción. Evo Morales de Bolivia fue depuesto por un golpe de Estado en 2019 luego de acusaciones no probadas de irregularidades electorales, que sin embargo parecían plausibles dado el deseo de Morales de aferrarse al poder (reflejado, por ejemplo, en su decisión de anular los resultados del referéndum sobre la reelección), solo para ser reemplazado por un gobierno interino altamente represivo. La falta de voluntad de Keiko Fujimori para aceptar los resultados de las últimas elecciones en Perú, el encarcelamiento de Lula antes de las elecciones brasileñas de 2018 por acusaciones que luego fueron retiradas y las insurrecciones violentas contra las instituciones democráticas en enero de 2023, ofrecen más ejemplos.

Nuestro argumento tiene implicaciones importantes para analizar la política progresista en América Latina. La región más desigual del mundo, América Latina siempre ha brindado un caldo de cultivo para la izquierda, pero esta fue reprimida o marginada durante décadas, y rara vez tuvo la oportunidad de ganar elecciones y gobernar por medios democráticos. Desde Guatemala hasta la República Dominicana y Chile, los gobiernos de izquierda fueron derrocados por golpes o invasiones. El final de la Guerra Fría llevó a algunos observadores a creer erróneamente que la izquierda desaparecería o tendría que aceptar dócilmente los mercados libres y la democracia liberal: o se transformaba en una fuerza socialdemócrata o se volvería irrelevante. Tales expectativas estaban mal fundadas. Por el contrario, la izquierda surgió para impugnar el neoliberalismo y desafiar los parámetros de la democracia liberal. Para explicar esta aparente anomalía se planteó otra tesis: que existían dos izquierdas en la región (Castañeda, 2006; Weyland *et al.*, 2010). Desde este punto de vista, se contrastaba una izquierda anacrónica, populista y autoritaria con una izquierda socialdemócrata moderna y favorable al mercado. La primera estaba representada por Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador; la segunda, por Tabaré Vázquez y José “Pepe” Mujica en Uruguay, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile y, con dudas, Lula de Brasil.

Tales tipologías de la izquierda política tienen más valor heurístico que explicativo. Argumentamos que un análisis más productivo debe reconocer que la izquierda refleja las condiciones —generalmente ajenas a ella— en las que emerge

(Cameron, 2009). Tal enfoque nos permite comprender mejor las diferencias y similitudes dentro y entre estos dos ciclos de la política de izquierda. En particular, nos enfocamos en eventos globales clave que contribuyeron a las victorias electorales de la izquierda latinoamericana en las últimas dos décadas y que interactuaron con las condiciones internas para dar forma a las estrategias de gobierno que los regímenes de izquierda siguieron una vez en el poder. La mayoría de los países de América Latina hicieron la transición de políticas nacionalistas y populistas asociadas con el modelo desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al neoliberalismo en la década de 1980. La era actual en la región está definida por el capitalismo neoliberal globalizado que impone restricciones frente a las cuales los ciclos de cambios políticos pueden verse como secuencias reactivas. Estas secuencias reactivas pueden implicar el rechazo de la globalización neoliberal por parte de la izquierda radical o respuestas reaccionarias contra la izquierda por parte de la derecha. Las lógicas de estos ciclos se desarrollan según la conjunción de condiciones específicas en momentos particulares.

El ensayo está organizado cronológicamente. La primera sección describe el papel que desempeñó la política exterior estadounidense en la exclusión de la izquierda de la arena política durante la Guerra Fría. Esto tuvo consecuencias de gran alcance para los débiles cimientos organizativos de la izquierda en el momento de la democratización. La segunda sección discute el surgimiento inicial y el establecimiento de la izquierda latinoamericana como contendiente electoral (1980-2015). Destacamos la importancia de dos factores externos en ese proceso. Por un lado, los hechos del 11 de septiembre de 2001 desplazaron el foco de la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente, abriendo espacio para que los movimientos de izquierda reorientaran las presiones populares desde la protesta social para avanzar a través de las instituciones electorales. Por otro lado, la demanda sin precedentes en los mercados internacionales de materias primas en la década de 2000 ofreció gran cantidad de recursos financieros que permitieron a muchos de estos actores construir proyectos políticos en torno a la expansión de políticas sociales financiadas por modelos económicos neoextractivistas. A mediados de la década de 2010, estos gobiernos de izquierda comenzaron a perder elecciones a medida que el auge de las materias primas retrocedía, los escándalos de corrupción cubrían la región y la reacción de la derecha se extendía por todo el continente: Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016-2018), Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Sebastián Piñera (2018-2022) en Chile, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-presente) en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador (2019-presente) y, en Estados Unidos, Donald Trump (2016-2020).

La tercera sección se enfoca en el segundo ciclo de gobiernos de izquierda, comenzando hacia finales de la última década con el surgimiento de nuevos actores y la reconfiguración de coaliciones progresistas en la región. Argumentamos que el

segundo ciclo de la política de izquierda fue influenciado por varios factores: 1) la mala gestión de la pandemia de covid-19 por parte de muchos gobiernos; 2) la movilización popular y las protestas sociales vinculadas a un nuevo *zeitgeist* global de políticas progresistas relacionadas con el medio ambiente, la etnicidad, las desigualdades de género y LGBTQ+, los derechos humanos y la descolonización, y 3) el mayor debilitamiento del liderazgo y de la influencia de Estados Unidos tras la elección de Donald Trump. Estos actores de izquierda están llegando al poder bajo una economía global en recesión, dañada por la guerra en Ucrania y la alta inflación. Esto significa que no tendrán acceso a los recursos financieros que hicieron posible la construcción de proyectos de izquierda a través de la expansión de programas sociales, sino que deberán emprender reformas potencialmente más profundas para mantener el apoyo de sus coaliciones o enfrentar la derrota electoral.

LA IZQUIERDA EN AMÉRICA LATINA DURANTE LA GUERRA FRÍA

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, la izquierda permaneció excluida del poder en América Latina.¹ “¿Cómo [preguntaba Jorge Castañeda en 1993] ha podido una corriente de pensamiento, acción y motivación que apenas ha gobernado en América Latina y que ha sido mayoritariamente sometida a represión, división y marginación, generar tanta sensación de peligro en Estados Unidos y tanto interés y, a menudo, simpatía en otras partes del mundo?” Nuestro argumento es que la izquierda era marginal precisamente porque fue excluida del poder por una potencia hegemónica con un miedo excesivo al comunismo. Durante el siglo XX, Estados Unidos dedicó recursos abrumadores (patrocinando golpes de Estado, campañas de asesinatos, guerras sucias e incluso invasiones terrestres) para evitar que la izquierda tomara el poder. Según el recuento del historiador John H. Coatsworth, el gobierno de Estados Unidos “intervino con éxito para cambiar gobiernos en América Latina un total de al menos 41 veces” entre 1898 y 1994. “Eso equivale a una vez cada 28 meses durante todo un siglo...” (Coatsworth, 2005).

Un evento crítico en la exclusión de la izquierda latinoamericana fue el derrocamiento, respaldado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Arbenz había llegado al poder después de la presidencia del socialdemócrata Juan José Arévalo y continuó sus políticas moderadas con una Ley de Reforma Agraria que buscaba expropiar las tierras de la United Fruit Company y el fomento de la sindicalización. La reforma agraria, aunque fue diseñada por miembros del Partido Comunista que fueron invitados a participar en su gobierno, no fue más radical que reformas simi-

¹Para una revisión histórica, véase Dawson (2022: 206-260), especialmente la “Carta de Ernesto Che Guevara a Carlos Quijano, Editor del semanario uruguayo *Marcha*, 12 de marzo de 1965” (219-230).

lares patrocinadas y, de hecho, diseñadas por los políticos estadounidenses en los países asiáticos de la posguerra con el fin de acabar con un sistema agrario opresivo para permitir el desarrollo capitalista. La diferencia en este caso era que la reforma atacaba los intereses de una corporación estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos emprendió una campaña ilegal para desestabilizar al gobierno. Armó y organizó una fuerza paramilitar al mando de Carlos Castillo Armas que invadió Guatemala y depuso a Arbenz.

El derrocamiento de Arbenz convenció a muchos activistas de izquierda de que Estados Unidos bloquearía el camino democrático hacia el socialismo. La revolución cubana de 1959 fue aún más significativa. Por un lado, dio motivos para creer que el cambio revolucionario era posible en la región. Por el otro, reforzó la opinión de que Estados Unidos no toleraría un gobierno de izquierda cuando la administración del presidente John F. Kennedy respondió a la revolución cubana primero con la invasión de Bahía de Cochinos y, más tarde, con múltiples esfuerzos para asesinar a Fidel Castro y otros líderes cubanos, así como la imposición de un embargo comercial. La invasión de la República Dominicana en 1965, que derrocó al presidente democráticamente electo Juan Bosch después de que implementara lo que, de nuevo, solo pueden considerarse como reformas sociales modestas, fue otra prueba más de la voluntad de Estados Unidos de detener la política de izquierda en la región. Sin embargo, fue la participación del gobierno de Nixon en el derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende y su apoyo a la represión en otras dictaduras del Cono Sur lo que llegó a simbolizar de manera más notoria el bloqueo estadounidense a la izquierda democrática latinoamericana. Todavía en la década de 1980, Estados Unidos se mantuvo obstinadamente opuesto al surgimiento de movimientos de izquierda en la región, incluso si eso significaba armar y apoyar directamente la represión militar, como fue el caso en Centroamérica. El presidente estadounidense, Ronald Reagan, burló al Congreso de su país para apoyar ilegalmente la represión en Nicaragua y financiarla con las ganancias del tráfico de drogas y el negocio de armas con Irán. No hace falta insistir en el argumento: si eras un activista de izquierda en América Latina durante la Guerra Fría, tenías una diana pintada en la espalda.

La izquierda tenía dos opciones: reforma o revolución. O encontraban refugio en movimientos, partidos o gobiernos nacionalistas y populistas más tradicionales, o buscaban el cambio a través de la lucha armada. En países con presiones redistributivas masivas derivadas de la pobreza y la desigualdad, lo cual es la norma en prácticamente toda la región, la demanda de cambio tenía que encontrar alguna expresión. A menudo, esa expresión adoptó la forma de alguna variante del populismo nacionalista. En muchas partes de la región, populistas como Juan Perón, Lázaro Cárdenas y Getúlio Vargas articularon visiones de cambio social que tenían elementos progresistas, incluido un enfoque en ISI diseñado para fomentar un

mercado interno para una clase media en ascenso, brindar oportunidades para la incorporación política de trabajadores organizados, campesinos y sectores medios, y acabar con el poder y los privilegios de los sectores oligárquicos tradicionales de la sociedad. Sin embargo, estos no eran movimientos socialistas; de hecho, buscaban prevenir el cambio hacia el socialismo por el bien de la unidad nacional y la estabilidad política. Aunque en ocasiones desafiaron a los inversionistas extranjeros (como la expropiación del petróleo de Cárdenas en 1938 en México o la nacionalización del petróleo de Andrés Pérez en 1975 en Venezuela), lo hicieron dentro de las limitaciones de los programas nacionalistas de industrialización. Más que construir una socialdemocracia basada en organizaciones populares fuertes y autónomas, estos proyectos nacional-populistas típicamente ocurrieron, como en México, dentro de sistemas autoritarios y corporativistas o, en el mejor de los casos, en democracias limitadas por pactos entre élites.

En consecuencia, hablar de izquierda en ese contexto es, en el mejor de los casos, hablar de “izquierda-dentro-del-populismo”, es decir: la izquierda *dentro del* Partido Revolucionario Institucional (PRI), la izquierda *dentro del* peronismo, la izquierda *dentro del* régimen militar peruano. En Argentina, el peronismo desplazó y absorbió a la izquierda, en la medida en que, cuando surgieron las guerrillas urbanas en la década de 1970, no eran más que un ala radicalizada del peronismo (los Montoneros). En Perú, donde el poder oligárquico no se rompió hasta la década de 1960, los militares impusieron un veto al principal partido populista del país, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). Cuando finalmente los oficiales reformistas introdujeron políticas nacionalistas y populistas, muchos activistas de izquierda fueron reclutados para participar en el régimen, mientras que otros organizaron la resistencia desde abajo. Los gobiernos del PRI en México permitieron que existiera la izquierda dentro del partido —por ejemplo, al crear espacio para una política exterior no alineada o *tercermundista* bajo el presidente Luis Echeverría— pero reprimieron violentamente aquellas tendencias de izquierda que desafiaron la hegemonía del PRI (Echeverría era el secretario de Gobernación en el momento de la masacre de Tlatelolco de 1968). Por lo tanto, no sorprende que el desafío izquierdista más importante para el gobierno del PRI proviniera de alguien como Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente populista Lázaro Cárdenas, quien se postuló contra el PRI en 1988. Esa elección, envuelta en un fraude masivo, empañó la legitimidad del gobierno de Carlos Salinas, y alimentó la simpatía que muchos en la izquierda mexicana sintieron hacia lo que sería el último movimiento guerrillero de América Latina: los zapatistas.

En resumen, un rasgo distintivo de la política latinoamericana del siglo XX fue la exclusión del poder de la izquierda. En una región de desigualdades masivas y, por lo tanto, de enorme potencial para la política redistributiva, tal exclusión tuvo consecuencias. Significó, entre otras cosas, que la izquierda fuera cooptada por movi-

mientos nacional-populistas, a menudo autoritarios, o pasó a la clandestinidad e inició un periodo de política revolucionaria, desde la revolución cubana en 1959 hasta la revolución sandinista en 1979. Si queremos fechar el final de este periodo de política revolucionaria radical, los primeros años de la década de 1990 pueden servir a nuestro propósito. Ese es el año en que los sandinistas perdieron el poder en Nicaragua. Para sorpresa de casi todos, incluidos los líderes sandinistas y los políticos estadounidenses, la Unión Nacional Opositora (UNO), encabezada por Violeta Chamorro, ganó las elecciones de 1990, un resultado que los sandinistas aceptaron, consumando así la primera alternancia democrática de Nicaragua. Las negociaciones de paz en el vecino El Salvador aceleraron aún más el cambio del militarismo a la política democrática. Los guerrilleros salvadoreños decidieron negociar el fin del conflicto, no porque carecieran del poderío militar para derrocar al gobierno, sino porque se dieron cuenta de que Estados Unidos nunca les permitiría tomar y mantener el poder. Sin embargo, sabían que tenían suficiente apoyo popular para ganar elecciones y así lo hicieron después de los acuerdos de paz, primero a nivel municipal, luego en el congreso, y más tarde en la presidencia. Finalmente, la captura de Abimael Guzmán en Perú en 1992 inició un proceso de desarticulación del movimiento revolucionario más sanguinario y sectario de la región. La desmovilización del M-19 en Colombia dejó solo a las FARC para continuar la lucha armada, pero la lucha se volvió cada vez más sostenida por inyecciones masivas de dinero del narcotráfico en lugar de una posibilidad realista de revolución. La Constitución de 1991 en ese país ayudó a crear las condiciones para un arreglo pacífico que hoy encuentra su culminación en la elección de un exguerrillero del M-19. En resumen, para 1990 el ciclo de la política revolucionaria había llegado a su fin.

GIROS A LA IZQUIERDA DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA

Si un miedo desmesurado al comunismo alimentó la oposición estadounidense a los movimientos progresistas en América Latina, ¿qué efecto tuvo el fin de la Guerra Fría en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Esta interrogante apunta hacia la manera en que los marcos narrativos dan forma a decisiones y acciones políticas mediante la organización y creación de significados. El final de la Guerra Fría quizá tuvo un mayor efecto sobre la orientación de los líderes estadounidenses hacia América Latina y sobre las narrativas que la derecha latinoamericana movilizaría para dirigir las transiciones democráticas de las décadas de 1980 y 1990, que sobre la identidad de la izquierda latinoamericana. El final de la Guerra Fría se entendió como una victoria trascendental para Estados Unidos —en particular, para las administraciones de Reagan y Bush— que reforzaba el viejo mito del excepcionalismo estadounidense. Occidente había ganado; el capitalismo y el liberalismo habían triunfado. Este nuevo marco narrativo sustentó una serie de propuestas estadounidenses hacia la región, incluida la negociación del TLCAN, la Iniciativa para

las Américas, el inicio de las Cumbres de las Américas, y una proliferación de acuerdos bilaterales y regionales para fomentar la inversión, el comercio, la cooperación en materia de seguridad y vínculos diplomáticos más estrechos.

El nuevo interés de Estados Unidos en América Latina fue apoyado, con diversos grados de entusiasmo, por los líderes de centro y de derecha del hemisferio. La crisis de la deuda en la década de 1980 había obligado a los políticos de toda la región a abandonar las estrategias de proteccionismo y mirar hacia modelos de desarrollo orientados a la exportación, como lo habían hecho los “tigres asiáticos” antes que ellos. En algunos casos, el cambio hacia un modelo más favorable al mercado fue pragmático e instrumental, mientras que en otros casos la élite tecnocrática estaba compuesta por verdaderos creyentes. México bajo Salinas y Chile bajo la Concertación fueron los primeros en responder al canto de sirena del desarrollo de libre mercado al estilo estadounidense. De hecho, fue la iniciativa de Salinas de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos lo que conectó el final del marco narrativo de la Guerra Fría con el surgimiento de una región más pro estadounidense y orientada al mercado.

Desde la perspectiva del marco narrativo posterior a la Guerra Fría, el futuro de la izquierda latinoamericana parecía sombrío en ese momento, pero esto simplemente reflejaba un punto ciego en la narrativa. Un sentimiento creciente de frustración con los decepcionantes resultados del nuevo modelo económico y la falta de respuesta de los gobiernos que habían pactado con las élites durante las transiciones democráticas crearon demandas ciudadanas que exigían a gritos representación política. Para la mayoría de la izquierda latinoamericana, el giro de la oposición al capitalismo a la oposición al neoliberalismo no fue difícil, especialmente porque esto permitió a la izquierda capitalizar la frustración y la protesta sin amenazar con deshacer los derechos básicos de propiedad o desafiar el monopolio estatal de la coerción. Más tarde, esto resultaría crucial para su éxito electoral, como fue el caso más obvio con la “Carta al pueblo brasileño” de Lula durante su cuarta candidatura electoral en 2003, cuando aseguró a los inversionistas que se respetarían los derechos de propiedad.

El peso de las narrativas posteriores a la Guerra Fría y los legados organizativos de décadas de represión y exclusión aseguraron que los proyectos de izquierda siguieran siendo electoralmente inviables en la década de 1990. No es sorprendente entonces que la política de izquierda siguiera buscando canales extrainstitucionales. De hecho, el surgimiento y establecimiento de nuevos movimientos, líderes y partidos de izquierda en esa década comienza con el *caracazo* venezolano y la revuelta zapatista (Beasley-Murray, 2010).

La noticia del 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el TLCAN, del estallido insurgente en el estado sureño de Chiapas en México creó una disonancia cognitiva para quienes habían aceptado el argumento neoliberal para negociar el tratado. Apenas se puede imaginar un conjunto más discordante de

narrativas. México se había unido a un área de libre comercio que abarcaba toda América del Norte y que, a pesar de una devaluación mal manejada del peso, tenía la intención de llevar a México al Primer Mundo. Al mismo tiempo, el país experimentaba un levantamiento armado que recordaba las revoluciones cubana y mexicana. Algunos comentaristas señalaron que las condiciones de Chiapas eran más parecidas a las de las naciones vecinas de Centroamérica que al resto de México, pero esta visión ignoraba las estrategias altamente conectadas y expertas en tecnología de los zapatistas, quienes rápidamente convirtieron lo que al principio parecía una insurrección militar en un movimiento social con encuentros globales y giras nacionales y una estrategia de negociación con el gobierno que condujo a la construcción de zonas autónomas de autogobierno. Los zapatistas representaron una especie de etapa de transición de la izquierda latinoamericana, con un pie en las estrategias insurreccionales fuera de las instituciones democráticas inspiradas en la Revolución Cubana y un pie dentro de las nuevas políticas de cambio progresista en las que la idea de capturar el Estado y generar un proceso revolucionario desde arriba ya había sido abandonada. Por loables que fueran los objetivos del zapatismo, adolecía de una incoherencia fundamental. Por un lado, abrazó el *ethos* de “cambiar el mundo sin tomar el poder” (Holloway, 2002); pero, por otro lado, no logró transformarse en un movimiento social capaz de explotar los espacios disponibles dentro de un sistema mexicano que estaba experimentando un prolongado proceso de democratización (Inclán, 2018; Volpi, 2004).

El *caracazo* no fue solo un evento violento y dramático que telegrafió los peligros del desencadenamiento repentino y brutal de las reformas neoliberales, sino que también fue la chispa que encendió el chavismo. Fue el *caracazo* lo que empujó a Chávez hacia su intento fallido de golpe en 1992, tras el cual fue encarcelado, indultado y finalmente elegido presidente en 1998. Aunque Chávez llegó a ser visto como el abanderado de la extrema izquierda en América Latina, por sus pertinaces esfuerzos para implementar cambios socialistas por medios más o menos pacíficos, Chávez era en realidad una anomalía: su temperamento antidemocrático no provenía del populismo y el marxismo sino del militarismo. Fue el único líder de izquierda en el primer ciclo de giros a la izquierda de América Latina que surgió desde dentro de las fuerzas armadas.²

Chávez estaba inicialmente convencido de que la única forma en que la izquierda podría tomar el poder era mediante algún tipo de insurrección popular respaldada por militares. Si su golpe de 1992 hubiera tenido éxito, habría buscado excluir a todos los políticos asociados con el sistema de Puntofijo, el pacto que había generado la “partiarquía” venezolana de cuatro décadas (Cameron y Major, 2001: 262). Al

² Daniel Ortega había sido un combatiente sandinista. Ollanta Humala, presidente del Perú (2011-2016), también había realizado una carrera militar, aunque su izquierdismo se diluyó tras jurar el cargo.

fracasar, sin embargo, persiguió la destrucción del pacto de Puntofijo por medios electorales. Al igual que los zapatistas, había una incoherencia fundamental en este enfoque, que buscaba una revolución por medios democráticos. Pero las revoluciones se logran mediante la violencia y la política democrática exige compromisos, negociación, indulgencia, tolerancia a la oposición y otras cualidades de las que carecía Chávez (y, más importante aún, el chavismo como cultura partidista). Chávez leyó explícitamente la experiencia chilena con Allende como prueba de la necesidad de penetrar y controlar las fuerzas armadas. Mantuvo la visión de la izquierda revolucionaria de que el poder es para tomarlo y mantenerlo.

Sin embargo, el mundo estaba cambiando en direcciones que hacían anacrónica la política de la Guerra Fría de amigos contra enemigos en América Latina. Las secuelas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 favorecieron a la izquierda por tres razones. Primero, tras el 11 de septiembre, Estados Unidos desplazó su política exterior hacia el Medio Oriente con la lucha contra el “terrorismo islámico radical” y disminuyó su apoyo a los actores políticos de derecha en América Latina. En segundo lugar, los escándalos que siguieron rápidamente a la “guerra contra el terrorismo” crearon nuevos espacios narrativos para que los movimientos de izquierda de todo el mundo cuestionaran el triunfalismo ideológico del periodo posterior a la Guerra Fría. Finalmente, en una ruptura con la práctica de la Guerra Fría, Estados Unidos hizo pocos intentos por evitar que la izquierda gobernara.

Entrada la década de 1990, los actores políticos de izquierda en América Latina habían comenzado a abrirse camino por la vía electoral, principalmente a nivel local. Estas tendencias electorales alcanzaron la política nacional en 2003 con el triunfo electoral de Lula en Brasil, bajo la bandera del Partido de los Trabajadores, y el giro hacia la izquierda en Argentina del Partido Peronista pilotado por Néstor Kirchner. Le siguieron las elecciones de Tabaré Vázquez (2004) en Uruguay, Evo Morales (2005) en Bolivia, Rafael Correa (2007) en Ecuador y Fernando Lugo (2008) en Paraguay. Estos actores dieron representación política a los agravios contra los modelos económicos y políticos que siguieron a las transiciones a la democracia y que hasta entonces solo habían encontrado expresión a través de protestas sociales y movimientos insurreccionales. En Bolivia, el ascenso al poder de Morales siguió a las Guerras del Agua de 2000-2002 y el conflicto del gas de 2003, ambos desencadenados por iniciativas del gobierno para privatizar los recursos naturales, y se basó en una coalición de sindicatos y movimientos sociales indígenas. En Argentina, Kirchner usó la estructura organizativa del Partido Peronista para cooptar segmentos del movimiento piquetero, principalmente de trabajadores urbanos desempleados, que habían sacudido la política argentina en la década de 1990, para reforzar la facción de izquierda dentro del partido. En Brasil, la exitosa candidatura electoral de Lula en 2003 —el cuarto intento en su carrera— fue respaldada por una alianza de organizaciones de la clase trabajadora movilizadas por el Partido de los Traba-

jadores y movimientos sociales de campesinos sin tierra. En Ecuador, Correa recibió el apoyo de organizaciones indígenas que se habían convertido en actores políticos influyentes en los años anteriores (aunque estas organizaciones luego se distanciaron del gobierno de Correa).

Resulta crucial que estos nuevos líderes de izquierda hayan surgido de la sociedad civil y no de los grupos militares o revolucionarios. Llegaron al poder a través de elecciones y, una vez en el poder, gobernaron más o menos democráticamente. Del primer ciclo de la política progresista, dos casos, Venezuela y Nicaragua, se convirtieron en dictaduras. En el resto de la región, la izquierda no fue impulsada por vanguardias revolucionarias o camarillas militares conspiradoras, sino como resultado de protestas populares, la politización de la etnicidad y el indigenismo, las luchas nacionalistas por los recursos, las comunidades eclesíásticas y los movimientos de la clase trabajadora.

Sin embargo, sugerir que la izquierda simplemente abrazó las reglas del juego democrático sería simplista. Existía un camino para que la izquierda radical ganara elecciones y permaneciera en el poder con cierto apoyo electoral, pero a través de transformaciones radicales del sistema político. Nos referimos, por supuesto, a los esfuerzos por refundar las repúblicas a través de un llamado al poder constituyente del pueblo para rehacer sus instituciones políticas de acuerdo con concepciones mayoritarias de soberanía popular. En este sentido, el chavismo fue pionero en una corriente de reforma constitucional por medio de asambleas constituyentes. Si bien la idea de asambleas constituyentes no solo es perfectamente democrática sino también profundamente liberal, en la práctica el proceso de cambio constitucional tendió a estar dominado por los líderes ejecutivos y sus partidos y, por lo tanto, representaba en algunos aspectos una práctica bastante antiliberal. Sin minimizar la amenaza a la democracia que representaban líderes cesaristas como Morales y Correa que buscaban perpetuarse en el poder por la vía plebiscitaria, vale la pena recordar que estos procesos desencadenaron presiones de cambio que podrían haber tomado formas mucho menos constructivas (incluida la volatilidad política en Ecuador y la amenaza de guerra civil en Bolivia).

Muchos de los gobiernos de la nueva izquierda además usaron la expansión dramática de programas sociales como estrategia para permanecer en el poder. Estas políticas eran ciertamente necesarias para paliar las enormes desigualdades que caracterizaban a la región. Sin embargo, también se utilizaron en muchos casos como instrumentos políticos para mantener el apoyo popular. Estas estrategias fueron posibles gracias a condiciones económicas altamente favorables caracterizadas por altos precios de las materias primas en los mercados internacionales impulsados por una mayor demanda de China e India y las bajas tasas de interés en Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008. Ante tal escenario macroeconómico, muchos de estos regímenes izquierdistas persiguieron proyectos

neoextractivistas en los que el Estado desempeñó un papel importante en la extracción y comercialización de bienes primarios y utilizó esas ganancias para financiar la expansión de programas sociales.

Durante su primer año en el cargo, Morales aumentó los impuestos sobre el petróleo y el gas para financiar programas sociales para el alivio de la pobreza que redujeron significativamente la desigualdad. Correa dependía de los ingresos de la extracción para sostener una agresiva expansión del gasto social. Lula también se benefició de los altos precios de las materias primas y, de hecho, la recesión posterior a 2013 sin duda afectó a su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016), quien fue depuesta por el Congreso brasileño tras protestas masivas contra el gobierno alimentadas en gran parte por agravios económicos.

El primer ciclo de la política de izquierda se agotó a mediados de la década de 2010 y, en un país tras otro, la derecha surgió como alternativa electoral. Como lo expresaron Santiago Anria y Kenneth Roberts (2019): “En general, las victorias de la derecha parecen ser una alternancia rutinaria de poder más que una tendencia regional con orígenes y fuerzas impulsoras comunes”. Dicho esto, el giro a la derecha también reflejó el surgimiento de fuertes movimientos sociales conservadores en Brasil, Perú, Colombia y Centroamérica, así como la creciente militancia de los partidos de extrema derecha y la adopción de repertorios de protesta típicamente monopolizados por la izquierda.

La radicalización de la derecha expresó, sobre todo, su pánico moral ante el avance de la política progresista, intensificado, sin duda, por la angustia de perder el poder y los privilegios asociados al *statu quo*. Aunque el primer ciclo de gobiernos de izquierda no fue particularmente progresista en la dimensión social (a pesar de las mejoras significativas en las políticas a favor del derecho a decidir en algunos casos, muchos gobiernos se mostraron ambivalentes acerca de los derechos LGBTQ+), las preocupaciones morales de las derechas ganaron terreno frente a sus propuestas económicas, siguiendo el patrón existente en otras partes del globo. Durante décadas, el movimiento evangélico ha ganado terreno en América Latina, en especial en Brasil y Centroamérica, y este movimiento se ha activado políticamente cada vez más. Cristianos evangélicos y católicos han encontrado puntos en común en su oposición a lo que se ha llamado “ideología de género”, una manera de referirse al feminismo. La politización de la religión es un factor clave, el cual desempeñó un papel importante en la caída del gobierno del PT en Brasil y el ascenso de Bolsonaro al poder. Esta derecha religiosa está conectada a nivel internacional, y tiene vínculos con el Partido Republicano en Estados Unidos, principal artífice de la activación política de la religión, utilizando temas como el aborto y la oposición a los derechos LGBTQ+ para movilizar sus bases.

No se puede ignorar el carácter antidemocrático de algunos elementos de la nueva derecha. La posverdad y la política antidemocrática de Trump han llegado a

América Latina, especialmente con Bolsonaro y Keiko Fujimori pero también, aunque de manera diferente, con José Antonio Kast y Rodolfo Hernández (de quienes se puede decir que, a diferencia de Bolsonaro y Fujimori, al menos aceptaron la derrota tras perder las elecciones presidenciales). Una característica del discurso de la derecha radical es el regreso al tema del anticomunismo, una narrativa que queda fuera de lugar en el contexto posterior a la Guerra Fría y parece más bien una estrategia retórica para exacerbar la polarización y la división. Sin embargo, la derecha latinoamericana no puede usar tan fácilmente la amenaza del comunismo para buscar aliados internacionales, como alguna vez lo hizo. Asimismo, la agenda de oposición a los derechos de las mujeres está más orientada a formar parte de una difusa audiencia global que a fundar un proyecto político institucionalizado.

Otra gran debilidad de la derecha es que, a pesar de su compromiso con el crecimiento económico, a menudo refleja las tendencias oligárquicas de la política latinoamericana que limitan el desarrollo económico. En ausencia de organizaciones fuertes del sector popular vinculadas a partidos programáticos de izquierda, la democracia representativa tiende a generar gobiernos oligárquicos que gobiernan a favor de ciertos intereses económicos. A lo largo de la historia, los movimientos de derecha en América Latina han sido menos propensos a movilizarse en torno a agendas programáticas y, en cambio, tienden a girar en torno a los intereses particulares de élites arraigadas para mantener políticas con efectos redistributivos regresivos. Como resultado, la derecha tiene dificultad para establecer coaliciones de gobierno duraderas porque casi siempre se fundamentan en una base social muy estrecha y dependen de la relativa desmovilización de los sectores populares. La derecha puede gobernar de manera más democrática en las socialdemocracias porque los programas de asistencia social están institucionalizados y no dependen de que la izquierda ocupe el poder. En América Latina, en cambio, la lucha entre izquierda y derecha tiende a oscilar entre periodos de movilización populista y modos de gobierno oligárquicos.

LÍDERES ACTUALES DE IZQUIERDA Y PARTIDOS EN EL CARGO

El reciente ciclo de victorias electorales de la izquierda sugiere que la alternancia en los cargos públicos se ha convertido en la norma y en la mayoría de los países de la región la izquierda participa en la alternancia democrática. Al mismo tiempo, varios factores coyunturales han contribuido al regreso de la izquierda en los últimos años. El primero está relacionado con la pandemia del covid-19 y, en particular, con la mala gestión de la emergencia de salud pública por parte de muchas administraciones de derecha. La pandemia expuso el costo de descuidar la infraestructura de salud pública y, de manera más general, hizo evidente la importancia de tener un Estado robusto capaz de proporcionar bienes públicos fundamentales. En este sentido, la pandemia hizo palpable cómo la reducción del sector público ha producido

sistemas de salud insuficientes y altamente desiguales, así como estados de bienestar débiles e incapaces de proporcionar las protecciones económicas necesarias para implementar medidas de emergencia de manera efectiva.

En segundo lugar, al igual que los giros a la izquierda en la década de 2000, la elección de gobiernos progresistas ha estado precedida por importantes protestas sociales. Las protestas debilitaron a los gobiernos conservadores de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en México, Iván Duque (2018-2022) en Colombia, Sebastián Piñera (2018-2022) en Chile, Lenín Moreno (2017-2021) en Ecuador, Jeanine Añez (2019-2020) en Bolivia, y evitó una toma de poder de la derecha en Perú. Esa turbulencia política debilitó a la derecha y creó un contexto en el que surgieron nuevos líderes políticos en la izquierda.

Muchas de estas protestas hicieron eco de un nuevo espíritu de política progresista influenciado por movimientos sociales de todo el mundo, que tendían a centrarse en los derechos humanos (especialmente en el contexto de los abusos del poder estatal y la brutalidad policial), la igualdad de género y LGBTQ+ y los pueblos indígenas y preocupaciones ambientales, a menudo envueltas en el manto de la descolonización. De hecho, una vez más, la izquierda llegó al poder después de protestas sociales a gran escala, pero mientras que las protestas de principios de la década de 2000 se debieron principalmente a agravios económicos y a la oposición al modelo económico neoliberal, las protestas de finales de la década de 2010 estuvieron más cerca de problemáticas posmaterialistas. Además, la creciente influencia del pensamiento descolonizador en los círculos de izquierda, aunque muchas veces limitado a la academia, ha influido en algunos casos en el posicionamiento de los partidos de ese ámbito ideológico. Esto es particularmente notable en Bolivia y, más recientemente, en Chile y Colombia.

Un tercer factor coyuntural ha sido la disminución de la estatura global de Estados Unidos tras la administración Trump. Trump revirtió ciertas políticas clave de Obama, como el descongelamiento de las relaciones con Cuba, y pareció apoyar una posición más dura contra Venezuela, hasta el punto de traer de vuelta al gobierno a halcones de los años de Reagan y Bush como Elliott Abrams. Sin embargo, por lo general Trump descuidó a América Latina y su sucesor, el presidente Joe Biden, ha hecho poco por cambiar las políticas de Trump hacia la región.

Más importante aún es el retroceso democrático en Estados Unidos desde 2016, el cual ha significado que su política exterior ya no sea una fuente de consenso bipartidista, lo que la convierte en un pilar poco confiable del orden internacional. Como resultado, Estados Unidos no solo ofrece poco a la región latinoamericana en términos de liderazgo diplomático, sino que también ha perdido mucho del poder blando asociado con la visión, justificada o no, de que Estados Unidos, debido a su compromiso con instituciones internacionales, es un fiel defensor de la democracia liberal en todo el mundo. La debilidad de la posición de Estados Unidos fue visible

en la dificultad que tuvo el gobierno de Biden para reunir a los líderes de la región dentro de la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en junio de 2022. La negativa de Estados Unidos a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua fue fuertemente reprendida por el canciller de México, Marcelo Ebrard, entre otros, y resultó en la ausencia de varios líderes.

Aunque esta caída en la estatura de Estados Unidos no es mal vista por los gobiernos progresistas latinoamericanos, tal debilidad obstaculiza el multilateralismo, en particular a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pone a prueba la capacidad de los gobiernos progresistas latinoamericanos para coordinarse colectivamente. En este sentido, el “segundo giro a la izquierda” es un fenómeno menos regional. Este no es un giro a la izquierda singular, ni siquiera el surgimiento de dos izquierdas distintas, sino una proliferación de diferentes tipos de izquierdas, tan diversos como las circunstancias internas de cada país.

El caso de Bolivia ilustra esta confluencia de factores. La presidenta interina Añez fue, desde el principio, una figura polarizadora, a pesar de que buscó presentarse como una presidenta interina que devolvería el país a la democracia y la estabilidad. Sin embargo, para muchos bolivianos, sus acciones fueron provocadoras. Asumió el cargo blandiendo una Biblia y nombró un gabinete sin miembros indígenas. El momento también fue desafortunado. El covid-19 golpeó a Bolivia en medio de la crisis. La polarización ocasionada por las elecciones de 2019 politizó la respuesta política y obstaculizó su efectividad (Velasco-Guachalla *et al.*, 2022: 528-529). A pesar de las medidas represivas, o quizás en parte debido a ellas, se produjeron protestas masivas en 2020, incluidas huelgas generales y salvajes en oposición al gobierno interino y en apoyo al MAS. Los manifestantes estaban furiosos por usar el covid-19 como excusa para retrasar nuevas elecciones. Para colmo de males, el papel desafortunado de la misión de observación electoral de la OEA permitió al MAS convertir la crisis en una lucha contra la intervención estadounidense.

En Argentina, la votación económica tuvo un papel clave en 2019, con dos miembros del *establishment* de izquierda, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, compitiendo en una candidatura que buscaba proyectar una imagen más pragmática que las administraciones anteriores de Cristina Fernández. Dicho esto, los derechos de las mujeres y LGBTQ+ fueron una parte central de esa campaña, luego de las protestas de la *mare verde* de 2018, cuando movimientos feministas organizaron las manifestaciones más grandes en la historia del país sobre el derecho al aborto. De hecho, esta podría ser el área de política en la que el gobierno de Fernández ha podido contribuir más a las reformas progresistas, impulsando la legalización del aborto en 2020.

En Chile, la carrera política de Gabriel Boric comenzó con las protestas estudiantiles de 2011-2013 y saltó a la fama durante el estallido social de 2019, que comenzó como una serie de manifestaciones contra los aumentos propuestos en el transporte

público en Santiago, pero se convirtió en una ola nacional de protestas sociales en respuesta al uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno para reprimir a los manifestantes. Al criticar la respuesta del gobierno, pedir la destitución de Sebastián Piñera y apoyar el llamado a un proceso constitucional, Boric se posicionó en el centro de una nueva coalición de movimientos progresistas en el país.

En Colombia, las protestas comenzaron en abril de 2021, en medio de la pandemia de covid-19 y en respuesta a los aumentos de impuestos y reformas de salud propuestos por el gobierno de Iván Duque. La intensa represión de la policía condujo a una escalada de las protestas. Mientras líderes de derecha como el expresidente Álvaro Uribe llamaron a la gente a apoyar a la policía, otros en la izquierda como Gustavo Petro apoyaron las manifestaciones. Lo que comenzó como una serie de manifestaciones contra políticas específicas, se convirtió en un movimiento más amplio por el cambio político que expresó un profundo descontento con la élite tradicional de derecha, exigiendo la renuncia del presidente Duque, el juicio de Uribe por crímenes de lesa humanidad durante su lucha contra las FARC, la reforma policial y la vuelta a los acuerdos del proceso de paz colombiano de 2020.

Incluso en Perú y México, donde, como argumentamos más adelante, las recientes victorias electorales de la izquierda están menos claramente impulsadas por agendas políticas progresistas, el éxito de la izquierda ocurrió tras intensas protestas sociales contra la corrupción de las élites. En México, la victoria de AMLO en 2018, en su tercera campaña presidencial, se benefició del descontento generalizado contra las administraciones anteriores del derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI. En particular, las manifestaciones contra la corrupción, la violencia de género y la cruenta estrategia de seguridad del gobierno marcaron la gestión de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En Perú, la elección de Castillo siguió a un periodo de dramáticas protestas desencadenadas por denuncias de corrupción en el contexto de las investigaciones Lava Jato y el devastador impacto de la pandemia de covid-19, que puso de relieve la insuficiencia de los sistemas de salud y la vulnerabilidad de grandes segmentos de la población. Inesperado ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, Castillo derrotó por poco a la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Fujimori era prácticamente el único candidato contra el que Castillo podía ganar, dada su alta desaprobación en la opinión pública.

Diferentes constelaciones de factores han dado forma a este segundo ciclo de la política de izquierda. Crucialmente, los gobiernos de izquierda se enfrentan hoy en día a circunstancias económicas más difíciles. En lugar de la derrama financiera que generó la creciente demanda internacional en los años 2000, los nuevos gobiernos de izquierda deberán operar en una economía global en recesión, todavía tambaleándose por la pandemia de covid-19 y con tendencias inflacionarias causadas por problemas en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania. Esto significa que las

administraciones de izquierda no tendrán fácil acceso a recursos externos para implementar costosos programas sociales. Esto, sumado al tipo de demandas planteadas por sus coaliciones progresistas, requerirá diferentes estrategias de gobierno para mantener el apoyo popular, lo que requerirá reformas estructurales profundas para abordar la desigualdad, la protección de los derechos humanos y la política ambiental.

Dado que la socialdemocracia, es decir, la búsqueda, por medios democráticos, de alguna forma de economía mixta para frenar las desigualdades socioeconómicas, a menudo se enmarca como la alternativa democrática progresista al populismo radical, un tema clave es si las condiciones sociales y políticas en América Latina son propicias para que este programa político crezca en la región. Somos escépticos ante cualquier afirmación simplista de que las condiciones para el surgimiento y establecimiento de una izquierda socialdemócrata finalmente están presentes en la región. Para que surja una socialdemocracia, las naciones latinoamericanas tendrán que enfrentar los desafíos planteados por la globalización neoliberal, mientras preservan la política democrática en un panorama político cada vez más polarizado. Además, necesitarán una izquierda democrática con la capacidad organizativa para defender la provisión de bienes públicos, impulsar sistemas fiscales más igualitarios, reforzar la protección ambiental y expandir los derechos y libertades fundamentales a nuevas áreas (incluyendo raza, etnia, religión, identidad sexual y expresión).

¿En qué medida es probable que ese escenario se presente en los países de la región? Vemos la clara posibilidad de que la izquierda se convierta en un contendiente competitivo regular para cargos públicos en Brasil, Argentina y Bolivia. Una fuerte indicación del grado en que la izquierda en estos casos se ha reconciliado con la alternancia en el cargo es la aparente falta de interés en cualquier tipo de reforma constitucional fundamental o el deseo de permanecer en el cargo más allá del límite prescrito por parte de los líderes de izquierda en estos países. Este también es el caso de Uruguay y Costa Rica, donde las políticas progresistas han sido aceptadas durante mucho tiempo por los principales políticos y donde el constitucionalismo está mejor establecido.

Es notable que tanto en Brasil como en Bolivia el ascenso de esta izquierda democrática radicalizó reacciones de derecha que pusieron a la democracia al borde de la ruptura. En ambos casos, contextos extremadamente polarizados han atado la supervivencia de la democracia al éxito y compromisos democráticos del MAS y el PT. Hasta ahora, al menos en el caso brasileño, el PT ha logrado ampliar su coalición para atraer una gran mayoría del espectro político, incluidos intereses empresariales y partidos políticos de centro-derecha, lo que evoca las amplias coaliciones socialdemócratas de la Europa de entreguerras. Sin embargo, el PT apenas logró asegurar una victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 y enfrentará

una fuerte oposición en la legislatura por parte de los aliados de extrema derecha de Bolsonaro. La coalición detrás del MAS en Bolivia no se ha ampliado significativamente más allá de sus bases centrales de apoyo entre los sindicatos y los grupos indígenas. Un gran desafío para los próximos años será la construcción de compromisos viables con otras partes de la sociedad boliviana para reducir los niveles extremos de polarización política sin renunciar a su agenda programática central.

Hay otro grupo de países en los que la izquierda ha llegado recientemente al poder por primera vez. En esta categoría están AMLO en México, Castillo en Perú, Boric en Chile y Petro en Colombia. Estos casos son especialmente notables porque se encuentran entre los países que se han resistido más a la política progresista. Aunque la izquierda participó en el gobierno de Chile bajo la Concertación, estaba limitada por la camisa de fuerza neoliberal impuesta por una constitución autoritaria, el sistema electoral binominal que garantizaba la sobrerrepresentación de la derecha y un poderoso consenso social sobre el modelo económico, que se ha desmoronado recientemente. En México y Perú, la izquierda en el poder es socialmente conservadora y carece de canales bien institucionalizados y autónomos para la participación popular.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dirigido por AMLO, se ha convertido en una importante maquinaria política populista pero, a pesar de la retórica de izquierda, la administración de AMLO se ha caracterizado por la implementación de una combinación de políticas progresistas y conservadoras. Si bien, después de décadas de gobierno del PRI y el PAN, México necesita una izquierda programática para frenar la desigualdad económica a través de políticas redistributivas progresivas, la expansión de los derechos sociales para los grupos marginados y fuertes protecciones ambientales, el gobierno de AMLO se queda corto en esta agenda. Ha tenido una relación profundamente conflictiva con el movimiento feminista, lo que también sucedió con muchos gobiernos de izquierda de la primera ola (Beer, 2021). Además, la administración de AMLO ha dado prioridad a cuestiones políticas tradicionalmente de derecha, en particular una agenda política de “austeridad republicana”. En la práctica, esto ha significado importantes recortes en los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y proyectos de infraestructura de alto perfil, mientras se continúa con una estrategia militarizada de seguridad nacional. En cierto sentido, AMLO ha gobernado como si representara al ala izquierda del PRI. Su gobierno tiene características de “izquierda en el populismo”, como en Argentina, en lugar del tipo de izquierda programática representada por, digamos, el Partido de los Trabajadores bajo Lula, el Frente Amplio en Uruguay o el MAS en Bolivia. Si bien Morena remodelará el sistema de partidos a su alrededor en los próximos años, es menos obvio que esto supondrá una consolidación significativa de las políticas de izquierda o formas más inclusivas de participación política. El futuro de la izquierda mexicana dependerá de los procesos internos de selección

de candidatos y estrategia de campaña de Morena en las próximas elecciones presidenciales de 2024, sobre todo respecto a la institucionalización de la participación popular a través de instituciones democráticas o a la reproducción de estrategias antidemocráticas para perpetuarse en el poder sofocando la competencia electoral. A la fecha, Morena ha fallado en fortalecer la organización del partido, construir fuertes vínculos con la sociedad y frenar las tendencias de AMLO al personalismo y la concentración de poder (Bruhn, 2021).

El breve periodo de Pedro Castillo en el poder entre julio de 2021 y diciembre de 2022 resalta las particularidades del caso peruano, donde la izquierda no ha logrado establecerse como un proyecto político importante ni ha conseguido que sus distintas facciones respeten los procesos democráticos. Muchas organizaciones de izquierda todavía padecen el estigma de su asociación con el extremismo de los años ochenta, cuando el movimiento revolucionario Sendero Luminoso lanzó una “guerra popular prolongada” contra el Estado peruano, la cual dio paso al régimen autoritario de los años noventa y al colapso del sistema de partidos. En una sociedad altamente desigual, donde las divisiones de raza, clase y regionales tienden a reforzarse mutuamente, el deseo de un cambio progresista con frecuencia busca expresión en la vida política, solo para verse frustrado de inmediato.

Hay un precedente en Perú donde un candidato de izquierda fue electo a la presidencia, pero no logró gobernar desde la izquierda una vez en el poder. Ollanta Humala (2011-2016) fue electo en 2011 prometiendo una “gran transformación”. Su candidatura resultó aceptable al electorado una vez que moderó su imagen, en buena medida gracias a que su pasado como miembro de las fuerzas armadas que combatieron al Sendero Luminoso hacía difícil acusarlo de formar parte de una izquierda subversiva. Sin embargo, al enfrentar una oposición implacable, la agenda progresista de su gobierno fue rápidamente abandonada y el gabinete compuesto por figuras de izquierda y dirigido por el primer ministro Salomón Lerner Ghitis duró menos de seis meses después de tomar el cargo en 2011.

Desencantados con Humala, muchos votantes progresistas recurrieron a Verónica Mendoza, quien tuvo un buen desempeño en las elecciones presidenciales de 2016 terminando en el tercer lugar. Mendoza estaba bien preparada, era pragmática, tenía experiencia política a pesar de su juventud, pero su moderación —sin duda motivada por el deseo de atraer a los progresistas moderados y evitar el estigma de la izquierda extrema, un vínculo especialmente problemático para ella dado el conservatismo social de la izquierda fuera de la intelligentsia limeña— le impidió aprovechar las frustraciones del electorado en 2021. El impacto devastador de la pandemia y la crisis económica que provocó, convencieron a una parte relevante de la ciudadanía peruana de votar por el cambio, un impulso que demostró ser suficiente para empujar a Castillo a ganar la primera ronda de la elección presidencial en 2021.

El inesperado éxito de Castillo en la primera ronda y su victoria contra Keiko Fujimori en la segunda lo catapultaron al palacio presidencial. Inicialmente, Castillo intentó gobernar con el apoyo de Vladimir Cerrón, un exgobernador del departamento de Junín cuyo partido, Perú Libre, había nominado a Castillo como candidato presidencial. Cerrón no ocultó su admiración por la Venezuela chavista y habló abiertamente sobre la necesidad de tomar el poder para mantenerse en el poder. Castillo estuvo dispuesto a convocar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución que reemplazara la constitución neoliberal de 1993, pero aceptó respetar el orden constitucional establecido. Conforme la relación entre el presidente y Perú Libre se volvió más tensa, el gobierno se volvió cada vez más caótico y desorganizado. En los primeros 18 meses en el poder, Castillo hizo sesenta cambios en su gabinete y logró pocos avances en la implementación de una agenda política progresista. Su enfoque se centró en la lucha por la supervivencia contra un *establishment* político intensamente movilizado y extremadamente molesto por haber perdido las elecciones.

Después de fracasar en sus intentos de cancelar las elecciones, la derecha en el congreso intentó sacar a Castillo del poder declarando la presidencia “vacante”. Dos intentos de destituir al presidente no lograron reunir los votos necesarios, pero un tercer intento parece haber alarmado a Castillo, quien intentó anticiparse anunciando la disolución del congreso. Sin embargo, Castillo no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas ni con suficiente apoyo popular, así que su estrategia fracasó en cuestión de horas. Castillo fue detenido mientras intentaba huir a la embajada mexicana y fue destituido de su cargo por el congreso. Al tomar el poder, la vicepresidenta Dina Boluarte inició un diálogo con la oposición en el congreso, intentando servir el resto del mandato de Castillo. Esto detonó importantes protestas, especialmente en las tierras altas del sur del país, que demandaban la renuncia de Boluarte, la reinstauración de Castillo y una asamblea constituyente que se diera a la tarea de escribir una nueva constitución. El gobierno respondió de manera represiva, causando más de veinte muertos en los enfrentamientos. Una vez más, la incapacidad de la izquierda para consolidarse como una fuerza política —debido tanto a su estigma entre las élites conservadoras como a su débil compromiso con los procesos democráticos— contribuyó a intensificar la inestabilidad del país.

Chile y, en menor medida, Colombia ofrecen perspectivas más favorables para el surgimiento y consolidación de la izquierda como fuerza política socialdemócrata. Estos casos han despertado interés y entusiasmo en los últimos días, no solo entre los movimientos progresistas dentro de Chile y Colombia, sino también a nivel mundial, dada la necesidad humanitaria de lograr una paz duradera en Colombia y la importancia del esfuerzo chileno para superar una constitución autoritaria arraigada en la era de Pinochet. Tanto Boric como Petro son evidentemente líderes que han demostrado estar igualmente comprometidos con la democracia y la justicia

social. No son agitadores intolerantes ni moderados equívocos y esto quizás ayude a explicar por qué sus oponentes conservadores, el derechista de línea dura Kast en Chile y el populista de derecha Hernández en Colombia —y quizás aún más significativamente Álvaro Uribe, quien sigue siendo una figura poderosa en la política colombiana— aceptaron de inmediato el resultado de las elecciones. Aunque rara vez se menciona a Petro en la prensa internacional sin señalar sus antecedentes como exguerrillero de izquierda (fue miembro del Movimiento-19 en la década de 1980), se ha desempeñado en cargos electivos durante décadas, primero como miembro del Congreso y senador, luego alcalde de Bogotá.

El simbolismo de la victoria de Boric en Chile es igualmente importante: surgió como líder estudiantil y a los 36 años es el líder más joven de América Latina al momento de su elección. El poder de este simbolismo solo es superado por la persona elegida por Petro para la vicepresidencia, Francia Márquez, una afrocolombiana activista ambiental y de derechos humanos que ha sido de vital importancia para ayudar a Petro a conectarse con los movimientos de protesta que tuvieron un papel fundamental en la elección. Tanto Petro como Boric obtuvieron cargos ejecutivos en países en los que el Estado no solo funciona con un alto nivel de capacidad, sino que también (con algunas excepciones significativas) mantiene sólidas tradiciones legales y constitucionales. En este sentido, representan contextos en los que parece posible el surgimiento de algo parecido a la socialdemocracia.

Ahora bien, Boric y Petro enfrentan enormes desafíos, que incluyen coaliciones de gobierno débiles o precarias y sociedades altamente movilizadas capaces de ventilar demandas largamente acumuladas. Como se señaló anteriormente, si bien Chile ha sido en ocasiones agrupado entre los países que se sumaron al primer ciclo de políticas de izquierda bajo los gobiernos de la Concertación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, esos líderes gobernaron con la camisa de fuerza de la Constitución de 1980 y no pudieron desafiar fundamentalmente el modelo económico neoliberal. Ante las protestas masivas, el estamento político chileno llegó a un acuerdo para iniciar un proceso de cambio constitucional. Este proceso fue diseñado deliberadamente para evitar las trampas de las asambleas constituyentes bolivarianas. Los miembros de la asamblea constituyente eran en gran medida independientes, se logró la paridad de género y se dio una voz sustancial a los representantes indígenas. Su mandato era reescribir la constitución, no gobernar o usurpar el funcionamiento de las instituciones existentes.

Los integrantes de la asamblea constituyente redactaron un proyecto constitucional que reconocía a Chile como una sociedad libre, igualitaria, inclusiva y plurinacional, y exhortaba al Estado a promover el *buen vivir* en armonía con la naturaleza. El borrador se sometió a referéndum el 4 de septiembre de 2022. Sin embargo, el arrastre electoral de Boric resultó insuficiente; de hecho, la decepción con su gobierno puede haber contribuido al rechazo del borrador. Este fue un golpe para

el proyecto de izquierda en Chile y un recordatorio de los desafíos que enfrenta la izquierda en la región mientras busca dar expresión al deseo de cambio sin moverse tan rápido como para amenazar aspectos del *statu quo* que sociedades relativamente conservadoras todavía desean mantener. El cambio constitucional lleva tiempo, y una derrota en un referéndum no debería dar lugar a excesivo desánimo, especialmente porque es probable que el borrador siga funcionando como punto de referencia de cómo podría ser un futuro progresista en Chile y en otros lugares.

El desafío que enfrenta Petro en Colombia no es menos desalentador. Colombia ha estado en un estado de guerra latente o manifiesta durante la mayor parte de su historia republicana, y el fracaso del referéndum sobre el acuerdo de paz negociado por el presidente Santos reveló cuán profundamente dividida sigue la sociedad colombiana. Sin embargo, la victoria de un candidato de izquierda, que parecía muy difícil de imaginar hace unos pocos años, sugiere que el cambio no solo es posible, sino que se ha gestado desde hace años: la constitución de 1991, al romper el monopolio de los partidos tradicionales de Colombia, abrió la puerta a una transformación de una democracia pactada a una democracia genuinamente pluralista. Petro, como Boric, parece ser un genuino ambientalista, lo que lo convierte en un modelo distinto del modelo de “izquierda rentista” encarnado por Morales, Correa e incluso las administraciones anteriores de Lula. El papel y la posición de Francia Márquez en el gabinete pueden presagiar importantes cambios culturales, cambios que pueden parecer imperceptibles en el momento en que se introducen, pero cuyos frutos se cosechan con el paso del tiempo.

En las condiciones actuales, no somos optimistas sobre las perspectivas de amplias alianzas hemisféricas entre los gobiernos de izquierda de la región. A diferencia de la Alianza Bolivariana (o Alba) que pretendía crear un bloque de países en torno al liderazgo de Venezuela, hoy los gobiernos de izquierda de la región son más heterogéneos. En particular, una división importante dentro y entre los gobiernos de izquierda es su orientación hacia temas ambientales como el extractivismo y la conservación, temas estrechamente asociados con la agenda de descolonización y el avance de los derechos a la autodeterminación de los pueblos indígenas (Riofrancos, 2020).


CONCLUSIÓN

La resiliencia democrática en un contexto de desigualdades persistentes ha creado condiciones para la inclusión política plena e institucionalizada de partidos, movimientos y líderes de izquierda en la mayor parte de América Latina. La izquierda ha surgido y se ha consolidado como un actor político relevante y la mayoría de los ciudadanos se ha habituado a su presencia. Este proceso también ha conducido, en la mayoría de los casos, a la democratización de la izquierda. Durante la Guerra Fría, muchos activistas radicales imaginaron que tomar el poder era un evento único que exigía un sacrificio y un heroísmo excepcionales. Además, sin vías electorales hacia

el poder en los sistemas autoritarios de la región —sistemas que fueron respaldados y, en algunos casos, instalados con el apoyo de Estados Unidos—, la izquierda revolucionaria buscó no solo tomar el poder por la fuerza sino retenerlo por cualquier medio que fuera necesario. La retórica de la izquierda radical evocaba un mundo en el que la justicia solo podía lograrse a través de la violencia; mientras que la izquierda reformista luchó por encontrar formas de trabajar dentro de proyectos nacional-populistas a menudo autoritarios.

Después de décadas de democracia electoral, las concepciones militaristas de la política han dado paso gradualmente a una aceptación más generalizada de la necesidad de la alternancia entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, el populismo, una estrategia de movilización siempre presente dondequiera que persista la oligarquía, es una expresión típica de la política democrática: es “un fenómeno esencialmente electoral” (Foweraker, 2018: 111). Dada la tendencia del populismo a eludir los mecanismos de representación e intermediación, una izquierda programática vinculada a organizaciones robustas del sector popular ofrecería un mejor vehículo para la construcción de políticas y programas de bienestar que alimenten una democracia de alta calidad. De hecho, no sería descabellado sugerir que un síntoma de la fuerza y la calidad de la democracia en la región es la forma y el grado en que la izquierda como alternativa programática al *statu quo* es un factor importante.

Desafortunadamente, desde nuestro punto de vista, la socialdemocracia no parece estar a la vuelta de la esquina. En todos los casos, excepto en un pequeño número de países, las condiciones son mucho más propicias para el populismo, que siempre es un arma de doble filo para las instituciones democráticas. Además, el riesgo de que los actores de izquierda enfrenten obstáculos intratables una vez en el poder es hoy más probable que en las últimas tres décadas. A pesar de los estallidos de protesta social que han llevado al poder a muchos de estos actores, todavía necesitan gobernar sociedades con grandes segmentos de la población profundamente comprometidos con valores conservadores, como la derrota del referéndum constitucional chileno y los reñidos resultados de las elecciones presidenciales brasileñas nos recuerdan. Además, el actual ciclo político de izquierda se enfrentará a un entorno internacional hostil, fracturado por la crisis climática, la radicalización de las fuerzas políticas de derecha y una recesión económica mundial.

Ahora bien, fue precisamente en un contexto similar de polarización política y crisis económica donde surgió la socialdemocracia a principios del siglo xx. El carácter cada vez más democrático de la política progresista en muchas partes de América Latina, si se combina con vehículos organizativos robustos para la participación popular y reformas políticas que refuercen el estado de derecho democrático, tiene el potencial de crear una vez más condiciones propicias para la socialdemocracia. Nuestro objetivo ha sido ofrecer un mapa sobrio y realista de estas posibilidades y los obstáculos que enfrentarán en el camino. 

REFERENCIAS

- Anria, Santiago y Kenneth Roberts (2019), “A Right Turn in Latin America?” *AULA Blog*, Washington, D.C., American University-Centre for Latin American & Latino Studies.
- Arditi, Benjamin (2008), “Arguments about the Left Turns in Latin America: A Post-Liberal Politics?” *Latin American Research Review*, 43(3), pp. 59-81.
- Banco Mundial (2021), *The Gradual Rise and Rapid Decline of the Middle Class in Latin America and the Caribbean*, Washington, D.C., Banco Mundial, en: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35834> [fecha de consulta: 8 de septiembre de 2022].
- Beasley-Murray, Jon (2010), “Constituent Power and the Caracazo: The Exemplary Case of Venezuela”, en M.A. Cameron y E. Hershberg (eds.), *Latin America’s Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp. 127-143.
- Beasley-Murray, Jon, Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (2010), “Latin America’s Left Turns: A Tour d’Horizon”, en M.A. Cameron y E. Hershberg (eds.), *Latin America’s Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner Publishers.
- Beer, Caroline (2021), “Contradicciones y conflicto entre la Cuarta Transformación y el movimiento feminista”, *Política y Gobierno*, XXVIII(2), pp. 9-18.
- Bruhn, Kathleen (2021), “AMLO y su partido”, *Política y Gobierno*, XXVIII(2), pp. 19-26.
- Cameron, Maxwell A. (2009), “Latin America’s Left Turns: Beyond Good and Bad”, *Third World Quarterly*, 30(2), pp. 331-348.
- Cameron, Maxwell A. (2021a), “Pathways to Inclusion in Latin America”, en D. Kapiszewski, S. Levitsky y D.J. Yashar (eds.), *The Inclusionary Turn in Latin American Democracies*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 401-433.
- Cameron, Maxwell A. (2021b), “The Return of Oligarchy? Threats to Representative Democracy in Latin America”, *Third World Quarterly*, 42(4), pp. 775-792.
- Cameron, Maxwell A. y Eric Hershberg (eds.) (2010), *Latin America’s Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, Boulder, Lynne Rienner Publishers.
- Cameron, Maxwell A. y Flavie Major (2001), “Venezuela’s Hugo Chávez: Savior or Threat to Democracy”, *Latin American Research Review*, 36(3), pp. 255-265.
- Castañeda, Jorge G. (1993), *Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War*, Nueva York, Vintage.
- Castañeda, Jorge G. (2006), “Latin America’s Left Turn”, *Foreign Affairs*, 85(3), pp. 126-139.
- Coatsworth, John H. (2005), “United States Interventions: What For?” *ReVista: Harvard Review of Latin America*, 4(2), pp. 6-9, en: <https://revista.drclas.harvard.edu/united-states-interventions/> [fecha de consulta: 8 de septiembre de 2022].
- Dawson, Alexander (2022), *Latin America Since Independence: A History with Primary Sources*, 3a ed., Nueva York, Routledge.
- Foweraker, Joe (2018), *Polity: Demystifying Democracy in Latin America and Beyond*, Boulder, Lynne Rienner.
- Fukuyama, Francis (1992), *The End of History and the Last Man*, Nueva York, Free Press.
- Hershberg, Eric (2021), “What to Make of Trends in Latin American Presidential Elections?” *AULA Blog*, Washington, D.C., American University-Centre for Latin American & Latino Studies.
- Holloway, John (2002), *Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*, Londres, Pluto Press.
- Huber, Evelyne y John D. Stephens (2012), *Democracy and the Left: Social Policy and Inequality in Latin America*, Chicago, University of Chicago Press.

- Inclán, María (2018), *The Zapatista Movement and Mexico's Democratic Transition: Mobilization, Success, and Survival*, Nueva York, Oxford University Press. [El movimiento zapatista y la transición democrática en México: Oportunidades para la movilización, el éxito y la supervivencia. Ciudad de México: CIDE, 2021].
- Kapiszewski, Diana, Steven Levitsky y Deborah J. Yashar (2021), "Inequality, Democracy, and the Inclusionary Turn in Latin America", en D. Kapiszewski, S. Levitsky y D.J. Yashar (eds.), *The Inclusionary Turn in Latin American Democracies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Lehmann, David (2022), *After the Decolonial: Ethnicity, Gender and Social Justice in Latin America*, Cambridge, Polity.
- Montambeault, Françoise, Manuel Balán y Philip Oxhorn (2020), "Widening and Deepening Citizenship from the Left?" en M. Balán y F. Montambeault (eds.), *Legacies of the Left Turn in Latin America: The Promise of Inclusive Citizenship*, Notre Dame, University of Notre Dame Press, pp. 17-43.
- O'Donnell, Guillermo (2007), *Dissonances: Democratic Critiques of Democracy*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.
- O'Donnell, Guillermo (2010), *Democracy, Agency, and the State: Theory with Comparative Intent*, Nueva York, Oxford University Press.
- Riofranco, Thea y David Adler (2022), "Gabriel Boric and Latin America's New Pink Tide", *The New Statesman*, en: <https://www.newstatesman.com/ideas/2022/03/gabriel-boric-and-latin-americas-new-pink-tide> [fecha de consulta: 8 de septiembre de 2022].
- Riofranco, Thea (2020), *Resource Radicals: From Petro-Nationalism to Post-Extractivism in Ecuador*, Durham, Duke University Press.
- Velasco, Alejandro y Joshua Frens-String (2016), "Right Turn", *NACLA: Report on the Americas*, 48(4), pp. 301-302.
- Velasco-Guachalla, V. Ximena, Calla Hummel, Jami Nelson-Núñez y Carew Boulding (2022), "Legitimacy and Policy During Crises: Subnational Covid-19 Responses in Bolivia", *Perspectives on Politics*, 20(2), pp. 528-546, DOI: 10.1017/S1537592721001183.
- Volpi, Jorge (2004), *La guerra y las palabras: Una historia intelectual de 1994*, Ciudad de México, Ediciones Era.
- Weyland, Kurt, Raúl Madrid y Wendy Hunter (2010), *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*, Nueva York, Cambridge University Press.